

PARTE/S:	Electroingeniería SA y otro c/EN y otro s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad
TRIBUNAL:	Juzg. Fed. Córdoba - N° 1
SALA:	-
FECHA:	20/05/2020
JURISDICCIÓN	Córdoba

Córdoba, 20 de mayo de 2020.-Incorpórense el informe producido en los términos del Art.4, ley 26.854, ingresado por el apoderado de AFIP-DGI y el escrito presentado por el apoderado de la actora.

Téngase por interpuesto en tiempo y forma el recurso de reposición por la parte actora. Conforme el Art. 240, 2° párrafo del CPCN, se procede a su consideración.

En cuanto a los presupuestos del Art.230 del CPCN, cabe tener en cuenta que la empresa actora cuestiona las disposiciones pertinentes de la Ley 27.541 y la Resolución General AFIP 4667/2020, en cuanto entiende que resulta irrazonable y arbitrario que se le impida ingresar en el régimen de excepción que facilita la regularización de deudas y concede beneficios, en virtud de parámetros económicos que impugna por irrazonables y discriminatorios. En tanto tan solo por un parámetro objetivo se exige, para acogerse, que se encuentren inscriptos los beneficiarios como micro, pequeña o mediana empresa y con el certificado de inscripción, sin evaluación de la situación real y particular de cada caso específico.

Como ha expresado el máximo Tribunal, la suspensión solo temporal de los efectos de los actos dictados, se justifica en la necesidad de servir a dos intereses en principio contrapuestos, la tutela del interés público garantizada por la eficacia inmediata del acto administrativo, y de otro los efectos negativos que puede producir en el particular, ponderándose en la evaluación judicial de las solicitudes de medidas suspensivas, el equilibrio del interés particular con el interés público (CS, Fallos 303:625 entre otros).

Tomando en consideración que la no inclusión de la empresa actora, no obstante su categorización, en beneficios acordados por la Ley 27.541 y Resolución General AFIP 4667/2020, podría resultar en las actuales circunstancias, en un quebranto terminal, particularmente en una diferencia estimada de la deuda por tributos y recursos de la seguridad social vencidos al 3/11/2019 y actualizado al 31/03/2020 que asciende al total de \$ 2.819.282.355,08, suma a la que no se llega a responder con los todos los recursos del rubro "Efectivo y equivalente a efectivo" según se desprende del Informe Especial agregado en autos(fs.97/98). Considerando asimismo que la firma posee a enero de 2020 la cantidad de 224 empleados en nómina, a lo que se suma la implicancia sobre el empleo indirecto que genera la actividad, con mejor criterio, y sin que implique adelantar opinión respecto de la pretensión de fondo deducida, corresponde hacer lugar a la medida cautelar. En consecuencia, déjase sin efecto el proveído de fecha 14/04/2020.

En consecuencia, librese oficio a AFIP-DGI a fin de que arbitre las medidas necesarias (prácticas, técnicas y operativas) para habilitar a la empresa actora a acogerse al régimen estatuido en el Título IV-Capítulo 1 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública n° 27.541 y reglamentada por la Resolución General AFIP 4667/2020, para la regularización de obligaciones tributarias y recursos de la seguridad social y obtener los beneficios que la ley otorga a los demás contribuyentes y responsables admitidos, sin exigirse el encuadramiento y la inscripción como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, ni el certificado MiPyMe, por el plazo de seis meses (Art.5°, Ley 26.854). El acogimiento a la normativa deberá contemplar la posibilidad de acogimiento de manera de estar alcanzado por el porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de ellas, dispuesto por el Art.33 de la RG 4667/2020 para la fecha tope de ingreso.

Asimismo, cabe ordenar que la abstención de iniciar y/o proseguir contra la empresa actora y directivos cualquier reclamo o proceso administrativo o judicial vinculado a las obligaciones tributarias y recursos de la seguridad social susceptibles de

ser regularizadas en el marco del citado régimen legal; así como de trabar medidas cautelares en resguardo de dichas acreencias; denunciar o impulsar acciones en los términos del Régimen Penal Tributario, vinculadas a las obligaciones referidas; de instruir sumarios o aplicar sanciones administrativas respecto de las obligaciones citadas.-

Como contracautela, téngase presente la garantía ofrecida por la empresa actora aprobada mediante Acta de Directorio de fecha 6/05/2020 cuya copia se agrega a fs.138, consistente en la cesión en garantía de los derechos de crédito que le corresponden a "Electroingeniería S.A.", en virtud del Contrato Termoeléctrica Manuel Belgrano II, de la cual la sociedad resultó adjudicataria en la Licitación Pública Nacional e Internacional n° EE 05/2011 mediante Resolución ENARSA n° CyC 632/2014 de fecha 5/08/2014, hasta el monto de \$ 1.500.000.000.-

Emplácese a la actora para que en el término de cinco días proceda a acreditar el cumplimiento de la tasa de justicia conforme a la Acordada n° 41/2018, la que asciende a la suma de pesos un mil quinientos (\$ 1.500), bajo apercibimiento de aplicar una multa del 50% de la tasa omitida, y certificar la deuda dando intervención a la AFIP-DGI (arts. 9 y 11, ley 23.898), a cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el Art.5° de la ley 23.898. Notifíquese.-

Dr. Ricardo Bustos Fierro
Juez Federal